



República de Colombia
Juzgado Laboral Municipal
Pequeñas Causas
Armenia

Referencia	Acción de Tutela
Accionante:	Sandra Milena Quino Rodríguez
Agente Oficioso:	Luis Andrés Aristizábal Carvajal
Accionado:	Asmet Salud EPS S.A.S.
Radicación:	63-001-41-05-001-2023-00232-00

Armenia, siete (07) de julio de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE TUTELA

Decide el despacho en primera instancia la acción de tutela promovida por **Sandra Milena Quino Rodríguez** a través de **agente oficioso** en contra de **Asmet Salud EPS S.A.S.**

I. ANTECEDENTES

Sandra Milena Quino Rodríguez a través de «agente oficioso» promovió la acción constitucional con el propósito que se le ampare su derecho fundamental «*a la salud*», mismo que, presuntamente esta siendo transgredido por la entidad accionada al no suministrar medicamentos con el fin de tratar la «*DIABETES MELLITUS TIPO 2*» que padece.

Como fundamento de la acción, manifestó que, en la actualidad tiene 43 años de edad, que padece de “*Diabetes Mellitus Tipo 2*” y que, por tal motivo, su médico tratante le ordenó el suministro del medicamento “*SAXENDA 6 MG/ML LIRAGLITUDA 6.0000 MG OTRAS SOLUCIONES SUBCUTANEAS CAJA X 1 PLUMA MULTIDOSIS QUE INCLUYE CARTUCHO.*”

Aseveró que, debido a la patología su condición de salud está en muy mal estado, pues padece malestar constante, náuseas,

depresión, bajo peso, todo ello no solo afecta su salud, sino que puede poner en riesgo su vida.

Por su parte, **Asmet Salud EPS S.A.S** indica que verificada la formula médica aportada en el libelo de la tutela, ésta se encuentra vencida debido a que la orden era para un (1) mes y la fecha es del 03 de abril de 2023; es decir, la orden tenía una vigencia hasta el 03 de mayo de 2023, por lo tanto, no es posible autorizar la entrega del medicamento. Agregó que por esa razón, solicitó cita con el médico tratante con el fin de verificar la pertinencia de reformular y proceder a gestionar nuevo tratamiento, cita que a la fecha no se ha programado.

Finalmente, y en virtud de la gestión adelantada, solicita se declare improcedente el amparo constitucional, ya que considera carencia actual de objeto por hecho superado, al haber solicitado nueva cita médica y estar pendiente de su programación.

Para resolver basten las siguientes,

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Aspectos generales de la acción de tutela

Al tenor del **artículo 86 de la C.P.**, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario de defensa judicial de derechos fundamentales cuando quiera que éstos esten vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o privada en los casos previstos en la ley; además y de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991, para efectos de determinar la procedencia de la acción de tutela debe acreditarse los

requisitos de legitimación en la causa (activa y pasiva); la inmediatez; y la subsidiariedad.

En lo referente a la **legitimación en la causa por activa**, el artículo 86 de la constitución política en concordancia con el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, ésta se configura: i) a partir del ejercicio directo de la acción ii) de la representación legal, -como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas-, iii) a través de apoderado judicial -caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo-; iv) o por medio de agente oficioso. No obstante, esta última figura no procede directamente, pues es necesario que el agente oficioso afirme que actúa como tal y además demuestre que el agenciado no se encuentra posibilitado para promover su propia defensa. **(CC T-054 de 2014).**

Respecto de la **legitimación por pasiva**, de la lectura de los artículos 5, 13 y 42 del decreto 2591 se establece que la acción de tutela se puede promover contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, y de los particulares, en este último caso siempre que estén encargados de la prestación de un servicio público, o, respecto de quienes el solicitante se halle en situación de subordinación e indefensión.

En lo que comporta a la **inmediatez**, la finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; en ese orden si bien la acción de tutela se puede formularse en cualquier tiempo, su interposición debe darse en un tiempo razonable, oportuno y justo. Sin embargo, la Corte Constitucional ha indicado que el

requisito no es exigible de forma estricta cuando se demuestra que la vulneración cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos continúa y es actual. **(CC T-194 de 2021)**

Finalmente y en lo que atañe a la **subsidiariedad** el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, por lo que solo procede cuando quiera que el afectado no tenga otro medio de defensa judicial; también cuando existiendo el mecanismo i) se ejerza la acción como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) éste resulte ineficaz, caso en el que la tutela se convierte en un mecanismo de protección definitivo **(CC T-177 de 2013)**.

La valoración del perjuicio irremediable implica la concurrencia de varios elementos esenciales a saber, i) que sea cierto, es decir que existan fundamentos empíricos acerca de su probable ocurrencia, ii) debe ser inminente, esto es que esté próximo a suceder, y iii) que su prevención o mitigación sea urgente para evitar la consumación de un daño. **(CC-T 554 de 2019)**

Finalmente, respecto del requisito de subsidiariedad, para los asuntos como el aquí debatido, la Corte Constitucional ha considerado que, a pesar de que el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 asignó a la Superintendencia Nacional de Salud la función jurisdiccional de “*conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez*” los asuntos en los que exista conflicto entre las entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los usuarios,

dicho mecanismo no puede considerarse idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales. **(CC T-171 de 2018)**

2. Derecho fundamental a la Salud en Colombia.

Los **artículos 1 y 2 de la Ley estatutaria 1751 de 2015** establecieron la naturaleza y el contenido del derecho a la salud y reconocieron, explícitamente, su doble connotación: primero (i) como derecho fundamental autónomo e irrenunciable, que comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación y la promoción de la salud; segundo, (ii) como servicio público esencial obligatorio cuya prestación eficiente, universal y solidaria se ejecuta bajo la indelegable responsabilidad del Estado.

Al tenor de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, los artículos 153 y 156 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 6 de la Ley 1751 de 2015, el derecho a la salud se considera en la legislación colombiana, como un derecho fundamental autónomo e irrenunciable que debe garantizarse de conformidad con los principios rectores de *accesibilidad, solidaridad, continuidad e integralidad*, entre otros.

Por virtud del principio de accesibilidad, las entidades promotoras de salud (E.P.S.), tienen la obligación estatal de la prestación de dicho servicio y, en consecuencia, en ellas yace el deber de brindar todos los medios indispensables para que la referida accesibilidad sea materializada de forma real y efectiva **(C.C. Sentencia T-089 de 2018)**. En lo que respecta al principio de solidaridad, *los recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud deben distribuirse de tal manera que toda la población colombiana, sin distinción de su capacidad económica, acceda al servicio de salud* **(C.C. Sentencia T-089**

de 2018). El principio de continuidad supone el servicio de salud, al tratarse de un servicio público esencial, no debe ser interrumpido sin que medie justificación constitucionalmente admisible y se materializa en la obligación de las E.P.S de i) ofrecer las prestaciones de salud, de manera eficaz, regular, continua y de calidad, ii) abstenerse de realizar actuaciones y omitir obligaciones que supongan la interrupción de tratamientos iii) los conflictos contractuales o trabas administrativa que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso a los afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados **(C.C. Sentencia T-1198 de 2003)**. Finalmente, en lo que respecta al principio de integralidad, comprende la obligación del Estado y de las entidades encargadas de la prestación del servicio de salud de garantizar la autorización completa y oportuna de los tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás servicios que el paciente requiera para el cuidado de su patología y para sobrellevar su enfermedad **(C.C. Sentencia T-402 de 2018)**.

Un análisis constitucional de estos principios permite concluir, que el suministro de medicamentos y tecnologías constituye una de las principales obligaciones que deben cumplir las entidades promotoras del servicio de salud. Esta obligación debe satisfacerse de manera oportuna y eficiente, pues de no hacerlo, se presenta una vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del paciente, por cuanto la dilación injustificada en su entrega, generalmente se traduce en un retroceso en su proceso de recuperación o control de la enfermedad **(C.C. Sentencia T-092 de 2018)**.

3. Derecho a la Salud y su relación con la entrega de medicamentos.

Frente al específico aspecto de la protección constitucional del del derecho fundamental a la salud y su relación con el suministro oportuno y completo de medicamentos, la jurisprudencia constitucional ha destacado que la dilación o la imposición de barreras injustificadas en la entrega de los medicamentos a los que tiene derecho el paciente implica que el tratamiento ordenado no se inicie de manera oportuna o se suspenda, por lo que se puede generar una afectación irreparable en su condición y un retroceso en su proceso de recuperación o control de la enfermedad. En consecuencia, con estas situaciones se produciría la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal, a la dignidad humana y a la vida del usuario. Por tal razón, el suministro tardío o inoportuno de medicamentos desconoce los principios de integralidad y continuidad en la prestación del servicio de salud. **(CC T- 243-16)**

4. Caso Concreto

A partir de todo lo anteriormente expuesto, encuentra el despacho que, **Luis Andrés Aristizábal Carvajal** se encuentra legitimado por activa para invocar la protección de los derechos fundamentales de **Sandra Milena Quino Rodríguez** pues el mismo actúa como defensor público designado por la defensoría del pueblo, por lo que a las luces del inciso 3 del artículo 10 del decreto 2591 de 1991 se encuentra facultado para representar los intereses de la actora.

Por su parte **Asmet salud E.P.S S.A.S**, se encuentra legitimada por pasiva pues a pesar de que es una institución de derecho

privado, el **artículo 42 del decreto 2591 de 1991**, establece la procedencia de la acción de tutela contra particulares, en aquellos eventos en los que el particular presta un servicio público, situación que es la aquí descrita dado que la entidad es la encargada de garantizar la prestación del servicio público de seguridad social en salud.

Por otra parte, ha de destacarse que el requisito de inmediatez también se superó habida cuenta que la presunta afectación del derecho a la salud de la accionante se mantiene en el tiempo mientras no se garantice el acceso a las tecnologías y al tratamiento que deprecia.

Respecto de la subsidiariedad, ha de rememorarse que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la salvaguarda del derecho fundamental a la salud, dado que los asuntos como el aquí ventilado no tienen en la actualidad un trámite más expedito e idóneo que el presente amparo para la salvaguarda de las garantías reclamadas.

Así las cosas, entrando entonces en el análisis de fondo del asunto planteado se tiene que **Sandra Milena Quino Rodríguez** padece el diagnóstico de **“Diabetes Mellitus Tipo 2”** y que por tal razón le fue ordenado por su médico tratante el medicamento **“Saxenda 6 mg/ml liraglutida 6.0000 mg otras soluciones subcutaneas caja x 1 pluma multidosis que incluye cartucho”** (Folio 12 del archivo 01 del expediente digital), mismo que a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha sido suministrado a la accionante, según la accionada porque la orden de suministro se encuentra vencida.

En este orden de ideas, a juicio de este juzgador, fluye que con el actuar de la E.P.S. accionada no se superó la vulneración al

derecho a la salud de la accionante, pues no ha hecho entrega material de todos los medicamentos ordenados por su médico tratante, situación que transgrede el derecho fundamental a la salud, y los principios de *integralidad accesibilidad y continuidad*, y no son de recibo las talanqueras administrativas que ha formulado la accionada para suspender el tratamiento de la actora, máxime si se tiene en cuenta que la patología de la accionante es crónica, y requiere tratamiento constante.

Así las cosas, la solución que se acompasa con la protección del derecho fundamental a la salud de la accionante es ordenar a **Asmet Salud EPS S.A.S.** que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este proveído, adelante todas las actuaciones administrativas, tendientes a materializar la entrega a **Sandra Milena Quino Rodríguez** del medicamento denominado «**Saxenda 6 mg/ml liraglutida 6.0000 mg otras soluciones subcutaneas caja x 1 pluma multidosis que incluye cartucho**» conforme a las cantidades, tiempo y demás especificidades prescritas por el médico tratante.

III. DECISION.

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Laboral Municipal de Pequeñas Causas de Armenia Quindío**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER la tutela de los derechos invocados y particularmente el de la salud de **Sandra Milena Quino Rodríguez**, en contra de **Asmet Salud EPS S.A.S.**

SEGUNDO: ORDENAR a **Asmet Salud EPS S.A.S.** que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este proveído,

adelante todas las actuaciones administrativas, tendientes a materializar la entrega a **Sandra Milena Quino Rodríguez** del medicamento denominado **«Saxenda 6 mg/ml liraglutida 6.0000 mg otras soluciones subcutaneas caja x 1 pluma multidosis que incluye cartucho»** conforme a las cantidades, tiempo y demás especificidades prescritas por el médico tratante.

TERCERO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada

Notifíquese y cúmplase,



**MANUEL ALEJANDRO BASTIDAS PATIÑO
JUEZ**



Puede escanear este código QR para acceder al Micrositio del Juzgado o dirigirse al siguiente enlace <https://t.ly/P-59>